

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Saúl Ramírez Freire, Diputado por el G.P CIUDADANOS, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito, relativas condiciones y situación del Puerto de Melilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de Junio de 2017

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mucho se ha escrito y debatido en los medios de comunicación y en la Comisión de Interior la crisis del polizón que vivió Melilla el pasado mes de enero de 2017, cuando fue encontrado un joven en el interior de la bodega de un avión comercial. El hallazgo dejó en evidencia un grave agujero de seguridad en el perímetro del aeródromo, que se agravó aún más al conocerse se había remitido meses antes al Delegado del Gobierno por parte del propio director del aeropuerto un informe en el que se advertía de diversos fallos técnicos detectados.

El asunto fue preguntado en Comisión por nuestro grupo, si bien no se obtuvo más respuesta que la promesa de financiar los medios técnicos necesarios para restablecer la seguridad. Sobre depuración de responsabilidades y rendición de cuentas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no se pronunció, a pesar de que la gestión que viene realizando su representante en Melilla, Abdelmalik El Barkani, puede calificarse como nefasta en asuntos de seguridad y frontera.

Lo que ocurrió entonces de manera puntual en el Aeropuerto y suscitó un escándalo mediático, político y de seguridad, paradójicamente es algo que se repite de forma sistemática en el Puerto de Melilla casi a diario, según fuentes de la Guardia Civil, sin que nadie en Delegación del Gobierno o Ministerio del Interior haya dado la voz de alarma, ni ningún medio de comunicación lo haya recogido como un grave problema de seguridad.

A finales del mes de mayo, se hizo público que la Guardia Civil ha localizado e interceptado en tan solo cinco meses a un total de 4.500 personas procedentes de Marruecos y Argelia en la escollera y las inmediaciones del Puerto de Melilla. 4.500 personas indocumentadas —se calcula que el 40% del total son menores que deberían estar atendidos por el Gobierno de Melilla— que se ocultan de la Guardia Civil a la espera de embarcarse como polizones y alcanzar de manera clandestina la península en alguna de las rutas que conecta la ciudad con Málaga, Motril o Almería.

Especialmente reseñable fue lo ocurrido la noche del 26 de mayo de 2017, en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Melilla interceptaron a un total de 150 personas, entre adultos y menores en la redada más grande producida hasta la fecha. De aquel episodio, varios menores resultaron heridos al intentar alcanzar los barcos escalando por los amarres, y necesitaron intervención hospitalaria.

Especialmente grave fue lo que le ocurrió a otro menor tutelado por la Ciudad Autónoma, que tuvo que ser rescatado por los agentes de los bajos de un camión y trasladado a la UCI con varias fracturas y traumatismos, donde fue atendido varios días.

La presión que soportan a diario los agentes que vigilan las inmediaciones del Puerto es tan alta que la propia Asociación Española de Guardias Civiles ha reclamado más y mejor gestión y control de los menores que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene a su cargo. La llegada del verano propicia que los intentos de subir al barco se incrementen, así como la llegada de pateras procedentes de Marruecos. Estas y otras asociaciones de Guardias Civiles se vienen quejando desde hace meses del abandono que sufren los agentes y de las dificultades que viven para frenar la entrada de tantos adultos y menores que buscan su camino hacia la península de forma irregular.

Hasta ahora, el Consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma se ha resignado a decir que solamente pueden recoger y trasladar a los centros a los menores interceptados por la Policía y Guardia Civil, pero no obligarles a permanecer en ellos. Ciudadanos Melilla ha denunciado en varias ocasiones que las políticas actuales no dan fruto ni los recursos existentes —técnicos y humanos— son suficientes para revertir la situación.

El presupuesto que la Ciudad Autónoma destina a menores asciende, junto con el montante que recibe del Ministerio, a 13 millones de euros. A pesar de ello, la situación en Melilla empeora cada año sin que el Gobierno local sepa cómo reaccionar. El propio consejero de Bienestar Social no ha tenido reparos en admitir en persona no saber qué hacer con este problema, pero es necesario que el Gobierno central ponga el foco en el asunto y colabore para acabar con esta práctica que pone en riesgo la vida y la seguridad de muchas personas.

Por todo ello, solicito respuestas a las siguientes preguntas

PREGUNTA

1. ¿Piensa el Gobierno reforzar el Puerto de Melilla con más medios técnicos, humanos y de disuasión para impedir la entrada masiva de polizones?
2. ¿Incrementará la plantilla destinada a detectar y frenar la entrada irregular de menores en los tres pasos fronterizos de la Ciudad Autónoma?
3. ¿Se va a asumir algún tipo de responsabilidad por parte del Ministerio o de la Delegación

del Gobierno en Melilla por los continuos fracasos de seguridad que ponen en riesgo la vida de melillenses y extranjeros en el Puerto de Melilla?

4. ¿Va a exigir el Gobierno a la Ciudad Autónoma de Melilla mejores resultados que los obtenidos hasta ahora?
5. ¿Piensa el Gobierno modificar la normativa actual para incrementar el control y las competencias, de modo que se permita controlar la estancia de los menores infractores en Melilla?



Saul Ramirez Freire
Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos